

La CIA financia con el narcotráfico desestabilización del gobierno ecuatoriano

FRANCISCO MARÍN :: 07/12/2012

La maniobra ilegal es conseguir recursos para desestabilizar al gobierno del presidente Correa, considerado como uno de los más independientes de Washington

El periodista Patricio Mery reveló en octubre último una vasta operación para el transporte de droga de Bolivia a Chile en complicidad con la policía chilena y el ahora ministro de Defensa Rodrigo Hinzpeter, mano derecha del presidente Sebastián Piñera. La revelación trajo como consecuencia el hostigamiento contra el reportero chileno y su fuente. Pero el asunto dio un giro cuando a la información se agregó otro dato: que el dinero obtenido a partir de esa actividad ilícita estaría siendo usado por la CIA para desestabilizar al mandatario ecuatoriano Rafael Correa, uno de los hombres más odiados por Washington.

Valparaíso, Chile - La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos “financia actividades ilícitas” con recursos “del narcotráfico realizado por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la que mete unos 300 kilos mensuales de cocaína boliviana a través del paso Colina en una operación que tiene la anuencia de los altos mandos policiales y del exministro de Interior Rodrigo Hinzpeter”, actual ministro de Defensa, afirma el periodista chileno Patricio Mery.

En entrevista con Proceso Mery ratifica lo expresado por el semanario que él dirige, Panoramas News, en una serie de reportajes publicados desde el pasado 17 de octubre. La información apunta a que el objetivo de la maniobra ilegal es conseguir recursos para desestabilizar al gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, considerado en las altas esferas políticas y militares de Estados Unidos como uno de los mandatarios sudamericanos más hostiles a Washington.

En 2009 Correa cerró la base militar estadounidense de Manta. Y dada su popularidad, que pasa de 60%, es probable que renueve su mandato en las elecciones del próximo 17 de febrero.

Mery fundamenta sus acusaciones en lo que le dijo el exinspector de la PDI Fernando Ulloa, quien se le acercó en agosto pasado para hacerle una revelación: En febrero de 2011, cuando estaba a punto de interceptar el ingreso a Chile de un cargamento de cocaína de alta pureza, sus jefes le impidieron actuar.

Lo anterior ocurrió luego de que Ulloa avisara de ese tráfico de droga a su superior, el subprefecto de Investigaciones Juan Sepúlveda, a fin de que éste le diera los recursos logísticos y humanos necesarios para la operación.

En vez de ayudarlo, Sepúlveda le pidió que no se involucrara. Para justificarse le confió que la droga era resguardada por otros agentes de la PDI. Es decir, el tráfico se hacía con protección y -como Ulloa constataría más tarde- apoyo del alto mando policiaco.

Sepúlveda bloqueó el operativo de Ulloa, pese a que había sido ordenado por el fiscal del Ministerio Público Patricio Rosas.

Denuncias en oídos sordos

A principios de 2011 Ulloa descubrió que desde 2009 cada mes entraban a Chile entre 200 y 300 kilos de cocaína boliviana a través del muy poco utilizado paso Colina, que conduce a Argentina a la altura de la capital chilena. La droga venía en cajas de televisores transportadas en camiones.

A pesar de las advertencias de sus superiores, Ulloa insistió en su plan de decomisar la droga y capturar a los traficantes. Pero tres días antes de que llevara a cabo su operativo, funcionarios de la PDI lo visitaron en su domicilio y le comunicaron que debía dejar todas sus funciones en la capital chilena pues había sido trasladado a la norteña ciudad de Calama, a donde debía trasladarse de inmediato.

La orden venía del alto mando de la PDI.

Ulloa llegó con sus denuncias a las más altas esferas del poder, pero nadie movió un dedo para que los delitos revelados fueran sancionados.

Gracias a las gestiones de la diputada oficialista de la Unión Demócrata Independiente Mónica Zalaquett, Ulloa y su abogado, Aldo Duque, se reunieron con el ministro Hinzpeter el 16 de mayo de 2011. Zalaquett y Duque han reconocido ante los medios que participaron en dicha junta.

Después de relatar los hechos, Ulloa le entregó a Hinzpeter una carpeta con copias de los documentos y correos electrónicos que comprobaban sus denuncias y los nombres de los implicados en el tráfico de la droga y en la red de protección.

Entre los encubridores nombró al subprefecto Sepúlveda -ahora en retiro-; al entonces subjefe de unidad de la Brigada Criminalística de Maipú, Alfonso Sabando Gómez, que actualmente es jefe de la misma en Peñaflor; al subdirector operativo de la PDI, Juan Baeza Maturana, y a Luis Carreño Hohn, jefe de la XV Región Policial Arica y Parinacota, fronteriza con Perú y Bolivia, y, por lo tanto, zona neurálgica del narcotráfico.

Al ocurrir los hechos denunciados por Ulloa, Carreño era jefe del Departamento V de Asuntos Internos de Investigaciones; después de las acusaciones fue ascendido a jefe de zona.

Hinzpeter le pidió a Ulloa guardar silencio y le aseguró que en cuatro días solucionaría el problema. Le envió la denuncia al exfiscal y entonces asesor de Interior, Alejandro Peña, quien a su vez la remitió al fiscal nacional Sabas Chauán. Pero nada pasó.

Ulloa decidió hacer públicas las denuncias porque, después de más de un año de haberse reunido con Hinzpeter, nadie había sido llevado ante la justicia y la investigación se había estancado en el Ministerio Público. Indignado porque quienes delinquieron siguen intocados, se comunicó con Mery, a quien le dio la información.

De acuerdo con Mery, la operación de tráfico de drogas denunciada por Ulloa estaría relacionada con la detención del oficial en retiro de la armada Diego Sáez Luna en la sureña ciudad de Yumbel el pasado 17 de agosto, en posesión de ocho gramos de cocaína. Esta cantidad no es relevante, pero cuando allanaron su casa de Valparaíso encontraron 18 kilos de clorhidrato de cocaína, 116 de pasta base de cocaína y 22 de mariguana.

Según Mery, Sáez Luna era el enlace entre la CIA y la armada chilena en esa operación encubierta que busca desestabilizar al gobierno de Correa. De acuerdo con su versión, el oficial de la armada habría amenazado con decir “todo lo que sabe” en caso de que se le condene a prisión por participar en el tráfico de estupefacientes.